



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

PROCESO: EJECUTIVO LABORAL.

DEMANDANTE: CRISTINA ISABEL HERNANDEZ CORONELL.

DEMANDADO: MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA-ATLANTICO.

RADICADO: 08-001-31-05-013-2010-00454-00.

INFORME SECRETARIAL.

Al Despacho el presente proceso informándole que, mediante auto de 29 de junio de 2010, se libró mandamiento de pago por la suma de \$3.762.408, más \$18.237,53 diarios desde el 3 de julio de 2008 y hasta que se cancele lo adeudado. El municipio demandado contestó la demanda y propuso las excepciones de no integración de un título complejo, improcedencia del reconocimiento de sanción moratoria de cesantías por vía judicial por inaplicación de la ley 244 de 1995, e ineptitud de la demanda por falta de requisitos de forma. Así mismo, le informo que en audiencia de 24 de agosto de 2010, el Juez de la época, resolvió declarar no probadas las excepciones propuestas por la ejecutada, seguir adelante la ejecución en la forma dispuesta en el mandamiento de pago de 29 de junio de 2010, ordenó practicar la liquidación del crédito, se pagara a la ejecutante con el producto de los bienes embargados, e impuso costas a cargo de la ejecutada, lo cual quedó consignado en el acta de esa audiencia, sin embargo, sobre el particular he de ponerle de presente que, escuchado el audio de la referida audiencia del 24 de agosto de 2010, se advierte que en la misma audiencia contra esa decisión el apoderado de la parte ejecutada interpuso recurso de apelación el cual fue denegado, y contra esta decisión la ejecutada interpuso recurso de reposición y solicitó la expedición de copias de las piezas procesales ante lo cual en la misma audiencia el Juez de la época no repuso la decisión y ordeno que se expida copia de las piezas procesales para que la ejecutada si lo estima procedente interponga recurso de queja ante el superior funcional, en ese sentido, también debo informarle que, en el acta que recoge los momentos importantes de la audiencia celebrada el 24 de agosto de 2010, no da cuenta de la interposición del referido recurso de apelación contra el auto que ordenó seguir adelante la ejecución, ni de los recursos de reposición y queja, frente a lo cual, le informo que tampoco obra en el proceso evidencia de que las copias se hubieran entregado a la parte interesada o que el interesado hubiera retirado las copias dentro del término legal, ni que el juez de la época declarara precluido el término para expedirlas, previo informe del secretario de entonces, el cual también se echa de menos. Por otra parte, le informo que, posteriormente, el 14 de diciembre de 2010, se decretó embargo y secuestro de dineros de propiedad de la demandada en el Banco Agrario de Juan de Acosta, así como los dineros que reciba la demandada por concepto de impuesto de degüello, industria, comercio y retención en la fuente. También le informo que, el 16 de junio de 2011 la parte demandante presentó liquidación del crédito, por la suma de \$26.221.601,39, la que fue modificada en auto de 28 de junio de 2011 en la suma de \$23.148.902,39, y que en auto de 18 de julio de 2011 señaló costas del ejecutivo en cuantía de \$1.157.445,12, la que fue aprobada mediante proveído de 5 de agosto de 2011. De otro lado, le informo que el 14 de marzo de 2022, el Dr. Nicolas Molinares Coronell, presentó poder otorgado por la demandante, acompañado del registro civil de defunción de la señora Catalina Molina Arteta, quien fungía como apoderada de la parte activa, además escrito solicitando reliquidación del crédito y medidas cautelares consistente en embargo y secuestro de los dineros que posea el Municipio de Juan de Acosta por concepto de cualquier pago que le haga Condominio Aguamarina Beach Resort. También le informo que, revisada la página de títulos del Banco Agrario de Colombia, no se evidencian títulos consignados a favor de la demandante que fueran consignados a órdenes de este Juzgado. Finalmente, es de anotar que los términos judiciales estuvieron suspendidos por tres días hábiles correspondientes a los días 2, 3 y 4 de mayo de 2023, así como los días 26, 27 y 28 de junio del presente año, con ocasión al cierre extraordinario ordenado con el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico mediante los Acuerdos No CSJATA23-209 y 260 de 2023, e igualmente, que la Secretaría del Juzgado, frente a la cual hubo cambio de secretario a mitad de febrero de este año, está en labores de organización para el trámite de los procesos, clasificación de la carga activa, y depuración de archivos tanto físicos como



Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

digitales, con ocasión a la restante digitalización del Juzgado frente expediente anteriores a este pendiente por tramitar, atendiendo que entre los días 1º al 16 de junio de 2.023 la Secretaría del Juzgado estuvo trabajando 100% en la adecuación de los 73 expedientes que se remitieron al Juzgado 16 Laboral del Circuito de esta ciudad en virtud de la medida de redistribución de procesos del Acuerdo CSJATA23-227 de 2023, lo que permitió el envío físico y digital de los expedientes el 16 de junio de 2.023, y también, le pongo de presente que debido a algunas devoluciones que realiza la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla por carecer de gestor, el Juzgado también se encuentra realizando tareas de creación de expedientes digitales en dicha plataforma, lo que ha resultado más dispendioso de lo esperado por la complejidad del aplicativo. Sírvasse proveer.

Barranquilla, 19 de julio de 2023.

MARIA B. POTES SANTODOMINGO
Secretaria

JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA. Barranquilla, diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023).

Visto el informe secretarial que antecede y constatado que el presente proceso fue presentado a través de apoderada judicial por la señora CRISTINA HERNÁNDEZ CORONELL contra el MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, con la finalidad de que este le pague las prestaciones reconocidas en Resolución 091 de abril 10 de 2008, consistente en: Auxilio de Cesantías \$1.600.344, intereses de cesantías \$561.721, vacaciones \$800.172 y saldo de deuda de octubre, noviembre y diciembre de 2007 \$741.378, lo que arroja la suma de \$3.703.615, y no los \$4.503.786 que se indica en la demanda; además solicita los intereses moratorios a partir de que se hizo exigible la obligación reconocida en la Resolución 091 del 10 de abril de 2008, costas, indexación y agencias en derecho.

Se observa que por auto de 29 de junio de 2010, se libró mandamiento de pago por la suma de \$3.762.408 por prestaciones más la indemnización moratoria a razón de \$18.237.53, decisión que fue notificada y contra la cual la entidad ejecutada contestó la demanda y propuso las excepciones de no integración de un título complejo, improcedencia del reconocimiento de sanción moratoria de cesantías por vía judicial por inaplicación de la Ley 244 de 1995, e ineptitud de la demanda, de las cuales se corrió traslado a la contraparte en proveído del 23 de julio de 2.010.

Así mismo, que en audiencia celebrada el 24 de agosto de 2010, el señor Juez de la época resolvió, declarar no probadas las excepciones propuestas por la ejecutada, seguir adelante la ejecución en la forma dispuesta en el mandamiento de pago de 29 de junio de 2010, practicar la liquidación del crédito, se pagara a la ejecutante con el producto de los bienes embargados e impuso costas a cargo de la ejecutada; y aunque en efecto, como lo anota el informe secretarial, el acta de dicha audiencia no registra que se interpusiera recurso alguno, no es menos cierto que al escuchar el audio se pudo constatar que, contra esa decisión el apoderado de la ejecutada interpuso recurso de apelación, el cual fue denegado y contra este auto interpuso recurso de reposición e igualmente solicitó la expedición de las copias de la providencia recurrida, frente a lo cual el funcionario judicial de entonces resolvió no reponer su decisión y ordenó expedir las copias procesales.

De otro lado, revisadas las demás piezas procesales, se encuentra que fue proferido auto de 14 de diciembre de 2010 que decretó el embargo y secuestro de los dineros de la demandada en cuentas corrientes del Banco Agrario del MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, entre otros, que el 16 de junio de 2011, la parte ejecutante presentó liquidación del crédito por un total de \$26.221.901.39, siendo modificada mediante auto de 28 de junio de 2011, en la suma de \$23.148.902,39 y posteriormente, en auto de 18 de julio de 2011



Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

fueron liquidadas las costas del ejecutivo en cuantía de \$1.157.445,12, siendo aprobadas en auto de 5 de agosto de 2011.

Sería entonces la oportunidad de pronunciarse sobre la solicitud de reliquidación del crédito y la nueva medida de embargo solicitada por la parte demandante, sin embargo, tal como fue señalado por este funcionario, contra el auto del 24 de agosto de 2010 que negó el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra el auto proferido en la misma calenda (24 de agosto de 2010) que resolvió las excepciones y ordenó seguir adelante la ejecución, la misma parte interpuso en audiencia, recurso de reposición y solicitó la expedición de copias procesales para remitir al Superior a fin de que se pronuncie sobre el recurso de queja, y que pese a que el Juez de la época resolvió no reponer su decisión y ordenó expedir las copias procesales, no milita en el expediente constancia secretarial que dé cuenta del no retiro de las copias, así como tampoco se evidencia declaración del funcionario judicial de la época que declare precluido el término para expedirlas por culpa de recurrente o por no haberlas retirado en el término de tres (3) días siguientes al aviso de su expedición por parte del Secretario, en la forma establecida en el artículo 108 del CPC, concordante con el artículo 378 CPC y Art.68CPTSS (Art.145 ibidem), normas del CPC que se encontraban vigentes entonces, por lo que ante esta situación, se impone proceder conforme lo dispuesto en los numerales 42 y 132 del Código General del Proceso, que son del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez:

(...)

12. Realizar el control de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa del proceso.”

“ARTÍCULO 132. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación.”

Teniendo en cuenta las normas citadas, es deber del Juez evitar actos procesales que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos, al ejercer el control de legalidad por el cual se encuentra facultado, asegurar la eficiencia y transparencia de la administración de justicia y corregir actos irregulares, en donde en este caso se advierte la falta de certeza de la ejecutoria del auto de fecha 24 de agosto de 2010 que ordenó seguir adelante la ejecución debido a que no se completó el trámite del recurso de queja interpuesto por la parte ejecutada contra el auto que negó el recurso de apelación.

Lo anterior por cuanto no es dable desatender que, pese a que el presente proceso data del año 2010, el numeral 6º del artículo 627 del Código General del Proceso que trata de su vigencia, establece:

“(…)

60. Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país.”

Y que el numeral 4º del artículo 625 del mismo Código preceptúa:



Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

“TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN.

Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación:

(...)

4. Para los procesos ejecutivos: Los procesos ejecutivos en curso, se tramitarán hasta el vencimiento del término para proponer excepciones con base en la legislación anterior. Vencido dicho término el proceso continuará su trámite conforme a las reglas establecidas en el Código General del Proceso.

En aquellos procesos ejecutivos en curso en los que, a la entrada en vigencia de este código, hubiese precluido el traslado para proponer excepciones, el trámite se adelantará con base en la legislación anterior hasta proferir la sentencia o auto que ordene seguir adelante la ejecución. Dictada alguna de estas providencias, el proceso se seguirá conforme a las reglas establecidas en el Código General del Proceso. ” (Subrayas fuera del texto original).

Atendiendo el estado del proceso, este asunto está sujeto al control de legalidad en cada etapa procesal cuya base se encuentra en el artículo 29 de la Constitución Política que consagra el debido proceso, el cual incluso se encontraba plasmado entre otras disposiciones como la del artículo 29 de la Ley 1395 de 2.010, que adicionó el inciso final del artículo 497 del CPC, así: “Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Con posterioridad, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título, sin perjuicio del control oficioso de legalidad” (Subrayas fuera del texto original).

Luego, este funcionario se encuentra habilitado por la facultad otorgada en el artículo 132 del CGP, para, agotada cada etapa del proceso realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso.

En el caso en concreto, se advierte como se indicó, la existencia de un recurso de queja interpuesto por la parte ejecutada contra el auto del 24 de agosto de 2.010 que negó el recurso de apelación contra la providencia de la misma fecha que declaró no probadas las excepciones al mandamiento de pago y ordenó de seguir la ejecución, entre otras disposiciones, al cual en dicha oportunidad no se le dio trámite en su integridad a fin de que este culminara de conformidad con lo dispuesto en el artículo 378 del CPC, que remite a su vez al artículo 108 de la misma normatividad, las cuales eran aplicables, en concordancia con el artículo 68 del CPTSS, para la fecha en que se profirió el citado auto del 24 de agosto de 2.010, que disponían:

“Artículo 378. Interposición y trámite. El recurrente deberá pedir reposición del auto que negó el recurso, y en subsidio que se expida copia de la providencia recurrida y de las demás piezas conducentes del proceso.

El auto que niegue la reposición ordenará las copias, y el recurrente deberá suministrar lo necesario para compulsarlas en el término de cinco días.

Cuando a una parte se conceda el recurso y en virtud de reposición llegare a revocarse tal providencia, la copia para proponer el de queja podrá solicitarse en el término de ejecutoria del auto que decidió la reposición.

El secretario dejará testimonio en el expediente y en la copia, de la fecha en que entregue ésta al interesado.

Si las copias no se compulsan por culpa del recurrente, el juez declarará precluido el término para expedirlas, previo informe del secretario. Procederá la misma declaración, cuando aquellas no se retiren dentro de los tres días siguientes al aviso de su expedición por parte del secretario, en la forma establecida en el artículo 108.

Dentro de los cinco días siguientes al recibo de las copias deberá formularse el recurso ante el superior, con expresión de los fundamentos que se invoquen para que se conceda el denegado. El escrito se mantendrá en la secretaría por dos días a disposición de la otra parte para que



Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

manifieste lo que estime oportuno, y surtido el traslado se decidirá el recurso. Si el recurso no se presenta dentro del término indicado, precluirá su procedencia. (...)” (*Negrillas y subrayas fuera de texto*).

“Artículo 108. Traslados. “Los traslados de un escrito no requieren auto, ni constancia en el expediente, salvo norma en contrario. El secretario lo agregará a éste y lo mantendrá en la secretaría por el término respectivo. Estos traslados se harán constar en una lista que se fijará en lugar visible de la secretaría, por un día, y correrán desde el siguiente.

Los traslados correrán en la secretaría, y allí se mantendrá el expediente sin solución de continuidad por el respectivo término, salvo los que se otorgan en el trámite del recurso de casación para los cuales podrá retirarse el expediente.” (*Subrayas fuera de texto*).

En el caso en estudio, no se avizora que, conforme la normatividad del CPC, norma vigente al momento de la expedición del auto de 24 de agosto de 2010, se hubiese finalizado el trámite al recurso de queja interpuesto por la ejecutada, así como tampoco se avizora por parte del juzgado declaratoria de preclusión del recurso de queja, lo que lleva inexorablemente a concluir que no habiéndose agotado el trámite del recurso de queja, el auto de 24 de agosto de 2010 que ordenó seguir adelante la ejecución aún no se encuentra en firme, por lo tanto, se impone corregir tal irregularidad, para lo cual se deberá dejar sin efecto toda actuación posterior al auto de fecha 24 de agosto de 2010, incluyendo las medidas cautelares decretadas en auto del 14 de diciembre de 2010, lo que a su vez, conlleva a que el Juzgado se abstenga de dar trámite a la reliquidación el crédito solicitada por la ejecutante.

Precisado lo anterior, como quiera que, actualmente en concordancia con el artículo 68 y 145 del CPTSS, se encuentra vigente el Código General del Proceso, que tratándose del recurso de queja dispone en su artículo 353, lo siguiente:

“Artículo 353. Interposición y trámite. El recurso de queja deberá interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la apelación o la casación, salvo cuando este sea consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el cual, deberá interponerse directamente dentro de la ejecutoria.

Denegada la reposición, o interpuesta la queja, según el caso, el juez ordenará la reproducción de las piezas procesales necesarias, para lo cual se procederá en la forma prevista para el trámite de la apelación. Expedidas las copias se remitirán al superior, quien podrá ordenar al inferior que remita copias de otras piezas del expediente.

(...)”. (*Subrayas fuera de texto*).

Por su parte, en lo relativo a la remisión del expediente y sus copias, el artículo 324 del mismo compendio procesal, señala:

“Tratándose de apelación de autos, la remisión del expediente o de sus copias al superior, se hará una vez surtido el traslado del escrito de sustentación, según lo previsto en el artículo 326. En el caso de las sentencias, el envío se hará una vez presentado el escrito al que se refiere el numeral 3 del artículo 322.

Sin embargo, cuando el juez de primera instancia conserve competencia para adelantar cualquier trámite, en el auto que conceda la apelación se ordenará que antes de remitirse el expediente se deje una reproducción de las piezas que el juez señale, a costa del recurrente, quien deberá suministrar las expensas necesarias en el término de cinco (5) días, so pena de ser declarado desierto. Suministradas oportunamente las expensas, el secretario deberá expedirlas dentro de los tres (3) días siguientes.

(...)”.

PARÁGRAFO. Cuando el juez de primera instancia tenga habilitado el Plan de Justicia Digital, el conocimiento del asunto en segunda instancia sólo podrá ser asignado a un despacho que



Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

haga parte del mismo sistema. En ningún caso podrá ordenarse la impresión del expediente digital.”

De lo anterior, se extrae que, para surtir el trámite del recurso de queja en principio es necesario que el recurrente cumpla con la carga procesal de pagar las expensas por concepto de copias en el término de cinco días, con lo cual, el Secretario deberá expedir y remitir al Superior para lo pertinente.

No obstante, con ocasión a la expedición del Decreto 806 de 2.020 hoy Ley 2213 de 2.022, en su artículo 2º estableció que deberán utilizarse las tecnologías de la información y las comunicaciones en el trámite de los procesos judiciales en curso y se evitará exigir el cumplimiento de formalidades que no sean estrictamente necesarias para tal fin, en los siguientes términos:

“Se podrán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones, cuando se disponga de los mismos de manera idónea, en la gestión y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia.

Se utilizarán los medios tecnológicos, para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios físicos.

(...)” (*Subrayas fuera de texto*).

Así las cosas, para surtir el recurso de queja en el marco de la virtualidad y digitalización de los procesos judiciales ya no es necesario remitir la copia física del expediente al Superior para el trámite correspondiente, pues, al darse prevalencia a las tecnologías de la información y tenerse las piezas procesales en forma digital, se prescinde claramente de la necesidad de remitir copias físicas para tal fin, criterio que incluso guarda concordancia con la sentencia en sede de tutela del 4 de febrero de 2.021 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, M.P. Dra. Myriam Stella Gutiérrez Arguello, Rad. 05001-23-33-000-2020-03884-01.

En consecuencia, en aplicación a lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022, se dispondrá que por Secretaría se realicen las acciones tendientes a materializar el trámite del recurso de queja interpuesto por el apoderado de la ejecutada MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA contra el mencionado auto del 24 de agosto de 2010.

En lo atinente a la nueva solicitud de medidas cautelares realizada por el apoderado de la parte demandante, esto es, el decreto del embargo y secuestro de los dineros que posea la ejecutada MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA por concepto de cualquier pago que le haga Condominio Aguamarina Beach Resort con Nit. 900.392.214-5, no es dable desatender que, dado el estado real y actual del proceso, se debe dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, conforme al cual:

“**ARTÍCULO 45. NO PROCEDIBILIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES.** La medida cautelar del embargo no aplicará sobre los recursos del sistema general de participaciones ni sobre los del sistema general de regalías, ni de las rentas propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios en los procesos contenciosos adelantados en su contra.

En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un municipio solo se podrá decretar embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución.

(...)” (*Negrilla y subraya fuera de texto*).



Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Por lo tanto, como en este caso la parte ejecutada es el **MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA**, la medida de embargo deprecada es improcedente hasta tanto no se encuentre ejecutoriado el auto de seguir adelante la ejecución, lo que como ya fue explicado ampliamente en precedencia, a la fecha materialmente no ha ocurrido, y así se dejará sentado en la parte resolutive de esta providencia.

Por último, respecto a la radicación del poder otorgado por la ejecutante señora **CRISTINA ISABEL HERNÁNDEZ CORONELL** al Dr. **NICOLÁS MOLINARES CORONELL**, y el Registro Civil de defunción de su anterior apoderada señora **CATALINA MOLINA ARTETA**, que pone de presente la terminación del poder y que es la propia demandante que comunica el deceso de quien era su apoderada a través de su actual abogado que realizó las precitadas solicitudes, resulta procedente reconocer personería para actuar en este proceso al nuevo apoderado de la ejecutante, en los términos y para los efectos del poder conferido conforme los artículos 75, 76 y 77 del CGP, aplicables por analogía a los juicios del trabajo en virtud de la integración normativa de que trata el artículo 145 del CPTSS.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

PRIMERO: DEJAR sin efecto toda la actuación proferida dentro del presente proceso con posterioridad al auto del 24 de agosto de 2010, por las razones antes expuestas, y en consecuencia, **DECRETESE** el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas en contra la parte ejecutada en auto del 14 de diciembre de 2010. Por secretaría, librese los oficios respectivos.

SEGUNDO: ABSTENERSE de dar trámite a la reliquidación del crédito formulada por la parte ejecutante, por las razones expuestas.

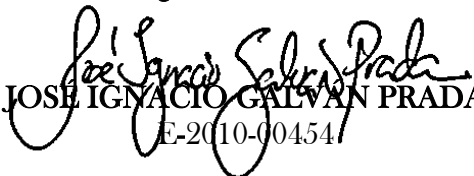
TERCERO: DENEGAR por improcedente la medida de embargo solicitada por la parte ejecutante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DESE trámite por Secretaría al recurso de queja interpuesto por la ejecutada contra el auto del 24 de agosto de 2010, de conformidad a las consideraciones antes esbozadas.

QUINTO: RECONOCER personería al Dr. **NICOLAS MOLINARES CORONELL**, como apoderado judicial de la demandante señora **CRISTINA ISABEL HERNÁNDEZ CORONELL**, en los términos y para los efectos del poder a él conferido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EL JUEZ,


JOSE IGNACIO GALVAN PRADA
E-2010-00454

Juzgado 13 Laboral Del Circuito de Barranquilla
Día 24 Mes 07 Año 2023
Notificado por el Estado N° 0106
La Providencia de fecha Día 19 Mes 07 Año 2023
La Secretaria María B Potes Santodomingo